



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: JOSÉ ENRIQUE CUELLAR ARTUNDUAGA
Demandados: PROTECCIÓN S.A. y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES
Radicado: 05001 31 05 005 2020 00086 01
Sentencia: S-043

AUTO

Se reconoce personería judicial para actuar - en los términos conferidos por el señor MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en Resolución 0849 del 19 de abril de 2021 -, a la Dra. YANETH CIFUENTES CABEZAS, portadora de la T.P. 52.885.363 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar al Ministerio accionado en este proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA concedido a favor del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 17 de noviembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

JOSÉ ENRIQUE CUELLAR ARTUNDUAGA demandó a PROTECCIÓN S.A., para que sea condenada a la reliquidación de la devolución de los saldos acumulados en su cuenta de ahorro individual, incluida la indexación y las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que solicitó la devolución de saldos ante la AFP PROTECCIÓN S.A.; que dicha entidad ordenó el reconocimiento mediante comunicado del 18 de noviembre de 2019 por un valor de \$23'788.599 por las cotizaciones realizadas a esa entidad; que en ese valor no se incluyó lo correspondiente al bono pensional por las 712.71 semanas que tiene cotizadas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; que es pensionado por el MUNICIPIO DE MEDELLÍN según Resolución 2901 del 26 de febrero de 2008 y por CAJANAL desde el acto administrativo 56296 del 4 de noviembre de ese mismo año; y que no existe incompatibilidad ya que no es posible entender que reciba dos asignaciones del tesoro público.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, PROTECCIÓN S.A. acepta todo lo relacionado con el reconocimiento de la devolución de saldos al demandante, advirtiéndole que en ese valor no se incluyó lo correspondiente al bono pensional, toda vez que su reconocimiento está a cargo exclusivamente de la Oficina de Bonos Pensionales, entidad que no lo ha pagado por considerar que existe una incompatibilidad con la pensión que ya recibe el demandante. Se opone a la devolución de saldos pretendida

en tanto ya cumplió con esa obligación desde el 5 de diciembre de 2019 cuando ordenó un pago por valor de \$23'778.941, agregando que el pago del bono pensional debe quedar supeditado a que se reconozca que el MINISTERIO DE HACIENDA tiene la obligación de emitirlo y pagarlo. Como excepciones propuso falta de causa legítima para pedir, inexistencia de la obligación, el hecho de un tercero, cobro de lo no debido, buena fe, compensación, prescripción y pago.

LITISCONSORCIO NECESARIO POR PASIVA

Por auto del 11 de mayo de 2021, el Juzgado de Primera Instancia dispuso la vinculación al proceso como litisconsorcio necesario por pasiva a LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, OFICINA DE BONOS PENSIONALES, entidad que contestó la demanda indicando que no le consta ninguno de los hechos y oponiéndose a todas las pretensiones en atención a la prohibición constitucional de recibir dos prestaciones que se encuentren financiadas con cargo a los recursos públicos, como sería la pensión de jubilación que se disfruta y el bono pensional que se persigue. Como excepciones propuso inaplicabilidad de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, aplicación del artículo 11 del Decreto 3995 de 2008, imposibilidad de recibir dos prestaciones con cargo a los recursos públicos y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, *i)* DECLARÓ que el demandante tiene derecho a la reliquidación de la devolución de saldos con la inclusión de las cotizaciones realizadas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; en consecuencia, *ii)* CONDENÓ al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a expedir el bono pensional por las cotizaciones realizadas por el demandante como trabajador del sector privado al ISS, junto con la respectiva indexación; *iii)* CONDENÓ a PROTECCIÓN

S.A. a estar presta a realizar todas las gestiones que legalmente le correspondan y pagar la devolución de saldos con los dineros provenientes del bono pensional, una vez sean recibidos; y *iv*) CONDENÓ al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO al pago de las costas del proceso, fijando como agencias en derecho la suma de \$1'817.052.

Conoce la Sala del asunto por **CONSULTA** a favor del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, solo se pronunció el MINISTERIO DE HACIENDA quien realizó algunas precisiones en torno al trámite que debe adelantarse para la emisión, redención y pago del bono pensional y solicitó evaluar la condena en costas impuesta en razón a quien siempre ha actuado de buena fe y con base en el ordenamiento jurídico vigente.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, el demandante JOSÉ ENRIQUE CUELLAR ARTUNDUAGA pretende a través de la presente acción judicial, la reliquidación de la devolución de los saldos existentes en su cuenta de ahorro individual, incluyendo lo concerniente al bono pensional por las cotizaciones realizadas al INSITUTO DE SEGUROS SOCIALES como trabajador del sector privado.

Se conoce del asunto por CONSULTA concedida a favor del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ante la decisión condenatoria de primera instancia y frente a la cual la AFP PROTECCIÓN S.A. no manifestó inconformidad alguna, lo que implica revisar la legalidad del fallo y analizar el argumento en el que ha insistido la parte opositora en cuanto a la imposibilidad en este caso

de entender como compatibles las prestaciones del Sistema General de Pensiones con la pensión de jubilación reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que implicaría que perciba dos asignaciones del tesoro público.

En primer lugar, la devolución de saldos establecida en el RAIS, es un derecho que se genera cuando un determinado afiliado no cumple con los requisitos mínimos que se exigen para obtener una pensión de vejez. Sin embargo, para su procedencia hay que tener en cuenta varios componentes derivados todos ellos de la literalidad de las normas cuando señalan, por ejemplo, el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, lo siguiente:

*“Quienes a las edades previstas en el artículo anterior (62 años los hombres, 57 las mujeres) no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros **y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar**, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.”*

Según la cita normativa, se tiene establecido que las personas que lleguen a la edad de 57 años en el caso de las mujeres, o de 62 para el caso de los hombres, y que no cumplan con las condiciones para generar una pensión mínima, tienen 2 posibilidades: la primera, continuar cotizando hasta alcanzar el capital necesario para generar la pensión; la segunda, solicitar la devolución de los saldos de la cuenta individual con los rendimientos y bonos pensionales que puedan llegar a existir.

En el presente caso, se tiene que el Sr. JOSÉ ENRIQUE CUELLAR ARTUNDUAGA nació el 12 de agosto de 1957; se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 15 de marzo de 1977, completando

en esa entidad un total de 509 semanas de cotización hasta el mes de enero del año 2000, cuando se trasladó a la AFP PROTECCIÓN S.A.; y que en esta última cotizó el equivalente a 662 semanas de cotizaciones, lo que permitió que se le reconociera una devolución de saldos, solo con fundamento en esos aportes al RAIS, por valor de \$23'788.599 según se infiere de la comunicación del 18 de noviembre de 2019.

De otro lado, se evidencia que mediante Resolución N° 2901 del 26 de febrero de 2008, la Secretaría de Educación de Medellín le reconoció al demandante una pensión de jubilación al haber prestado servicios por cerca de 30 años, concretamente desde el 21 de abril de 1978 y el 12 de agosto de 2007. Prestación reconocida a partir del 12 de agosto de 2007 por su calidad de *docente de vinculación Nacionalizado* al servicio del COLEGIO FELIX HENAO BOTERO de la ciudad de Medellín y cuyo pago corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

Adicionalmente, se tiene que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE, mediante Resolución 54296 del 4 de noviembre de 2008, dispuso a favor del demandante el reconocimiento de una pensión gracia por el hecho de haber prestado sus servicios como docente al servicio del DEPARTAMENTO DEL HUILA entre el 21 de abril de 1978 y el 4 de junio de 2008.

Ahora, si bien la AFP PROTECCIÓN S.A. procedió a reconocer la devolución de los saldos existentes en la cuenta de ahorro individual del señor JOSÉ ENRIQUE por las cotizaciones realizadas directamente a esa entidad, no hizo lo propio con el valor del bono pensional por las cotizaciones previas realizadas ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que debieron incluirse en los términos del artículo 66 de la Ley 100 de 1993 previamente citado. Decisión que tuvo como fundamento el hecho de que el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a través de su oficina de bonos pensionales,

argumentó que el reconocimiento y pago de ese bono es incompatible porque el demandante es beneficiario de otra pensión. El reporte de la entidad que se aporta como prueba, dice en palabras textuales lo siguiente: "*Beneficiario registrado con indicio pensión no ISS/COLPENSIONES incompatible con bono pensional*".

En ese sentido, el argumento del ente ministerial vinculado al proceso para oponerse al reconocimiento de la devolución de saldos incluyendo el valor del bono pensional, es la imposibilidad que tenía el demandante de afiliarse al Sistema General de Pensiones por exclusión expresa y mucho menos vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que ese bono tiene una naturaleza pública que resulta incompatible con la pensión que ya viene recibiendo.

Lo primero que se debe advertir, es que ha sido criterio de ésta Sala, en armonía con el desarrollo jurisprudencial elaborado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que la pensión de vejez o indemnización sustitutiva reconocidas por el ISS, hoy COLPENSIONES o la devolución de saldos a cargo de las administradoras de Fondos de Pensiones del RAIS, derivadas de las cotizaciones realizadas a entidades del sector privado, son compatibles con las prestaciones recibidas con ocasión de la actividad docente a entidades del sector oficial y/o el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

La Ley 100 de 1993 dispuso como marco general en el artículo 15, inciso primero, que eran afiliados obligatorios al Sistema General de Pensiones todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esa ley. En ese sentido, el artículo 279 de la misma ley, se ocupó del tema de los regímenes exceptuados, entre ellos, según el inc. 2º, "*los afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL*

MAGISTERIO creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración."

Posteriormente, la Ley 812 de 2003 estableció que los docentes que se lleguen a vincular con posterioridad a su vigencia, se regirían por el régimen establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo cual equiparó su tratamiento a los demás servidores en general, sean públicos o privados. Por otra parte, el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que desde su entrada en vigencia no podrían existir regímenes especiales ni exceptuados, con la salvedad de los regímenes especiales de los militares y el de la Presidencia de la República.

El Consejo de Estado, mediante fallo 9906 de 2011, señaló lo siguiente, en relación con los cambios normativos precedentes:

"La normativa hasta ahora reseñada permite concluir que el régimen pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se establece tomando como referencia la fecha de vinculación del docente al servicio educativo estatal, así: i) Si la vinculación es anterior al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, su régimen pensional corresponde al establecido en la ley 91 de 1989 y demás normas aplicables hasta ese momento, sin olvidar las diferencias provenientes de la condición de nacional, nacionalizado o territorial, predicables del docente en particular; Este régimen está llamado necesariamente a extinguirse en el tiempo a medida que decrece el número de sus destinatarios (régimen de transición). ii) Si el ingreso al servicio ocurrió a partir del 27 de junio de 2003, el régimen pensional es el de prima media con prestación definida, regulado por la ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la ley 797/03, pero teniendo en cuenta que la edad se unifica para hombres y mujeres, en 57 años. En ambas situaciones se trata de un régimen exceptuado por el legislador, pues mantienen e introducen modificaciones al régimen pensional general."

En este orden de ideas, en el caso de que un docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desde antes de la

vigencia de la Ley 812 de 2003, tenga otros vínculos laborales de carácter privado, surge para tales empleadores la obligación de afiliarlo al Sistema General de Pensiones, evento en el cual el trabajador puede optar entre cualquiera de los 2 regímenes, Prima Media con Prestación Definida o Ahorro Individual con Solidaridad, de tal manera que el afiliado tendrá derecho a las prestaciones y/o pensiones del sistema de manera compatible y en forma independiente, con relación a las que reciba del Fondo del Magisterio.

En el presente caso, se tiene que el demandante, además de causar la prestación ya reconocida por el Magisterio, e incluso otra a cargo de CAJANAL por los servicios prestados al DEPARTAMENTO DEL HUILA, acredita cotizaciones al Sistema General de Pensiones realizadas a la AFP PROTECCIÓN S.A. y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en este último caso desde el 15 de marzo de 1977 hasta el mes de enero del año 2000, por un total de 509 semanas.

En principio, entonces, le asiste el derecho al demandante a que esas cotizaciones, que no son suficientes para el reconocimiento de una pensión, le sean devueltas mediante la figura de la devolución de saldos debido a la afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A. que se realizó con posterioridad. En este punto, no pude olvidarse que, a diferencia del régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES en el cual los aportes de sus afiliados ingresan a un fondo común de naturaleza pública, en el régimen de ahorro individual con solidaridad los aportes entran a formar parte de una cuenta individual que le pertenece a cada afiliado, y que incluirá sus rendimientos financieros.

Ahora, se viene señalando que es factible que un docente oficial reciba la pensión de jubilación a cargo del FOMAG, y al propio tiempo cotice en pensión si se llegare a vincular con entidades del sector privado. Esta situación fue analizada por la Sala de Casación Laboral

de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 41.001 del 17 de julio de 2013, así:

“En efecto, por tener la calidad de docente oficial y estar excluida del Sistema Integral de Seguridad Social, al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el ISS, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional.

(...) El debate sobre el carácter de los dineros con que el ISS paga las prestaciones que concede, hace rato fue superado en el sentido de colegir que no tiene la calidad de asignación proveniente del tesoro público, en tanto los aportes que sirven para su financiación no tienen origen en fondos de naturaleza pública, dado que son realizados por empleadores y trabajadores, distinción que tampoco hizo el juez de la alzada, en desmedro de la posibilidad de acierto de la providencia gravada...”

Criterio que ha sido desarrollado en múltiples sentencias en idéntica dirección como la del 12 de agosto de 2009, Rad. 35374; del 3 de mayo de 2011, Rad. 39810; la del 6 de diciembre de 2011, rad. 40848, la SL 2655 del 4 de julio de 2018, rad. 64674, la SL 5092 del 19 de noviembre de 2019, rad. 71662, o más recientemente la SL 2649 del 1 de julio de 2020, rad. 76797 en la que se dijo:

“En lo que atañe al segundo aspecto, cumple indicar que el artículo 31 del Decreto 692 de 1994 prevé la posibilidad de acumular cotizaciones en el caso de profesores, en los siguientes términos:

Las personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el

mencionado Fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen seleccionado.

En cuanto a dicho postulado, la Sala ha precisado que solo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo”.

Adicionalmente, en reciente sentencia SL 3775 del 25 agosto de 2021, Rad. 86485, esa misma Corporación se ocupó nuevamente de analizar el tema indicando lo siguiente:

“... no puede confundirse el hecho de la afiliación del demandante en instancias al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su calidad de docente vinculado laboralmente a instituciones de carácter público, con su trabajo para instituciones particulares y la consecuente incorporación al Sistema General de Seguridad Social, pues, en cada caso, rigen reglas específicas, que aplican según la relación que se predique, lo que no significa que no sea posible gozar de la doble atribución, simultáneamente, y obtener las prestaciones que correspondan a cada uno de ellas, cumpliendo los requisitos del caso.

En esa misma providencia, la Corte explica el correcto entendimiento que se le debe dar a aquel artículo 81 de la Ley 812 de la siguiente manera:

“... el régimen exceptuado, tal y como venía funcionando, con las explicaciones ya dadas, se mantuvo para aquellos docentes que se encontraban vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, con atención, en todo caso, de los derechos adquiridos y las expectativas

*legítimas generadas durante su vigencia, es decir, para el caso, dado que el demandante se afilió al ISS desde el 16 de mayo de 1984, ninguna incidencia tenía sobre su situación particular lo prescrito por el artículo 81 citado y se encontraba plenamente habilitado, en el ejercicio de la docencia particular, para realizar aportes a cualquiera de los regímenes pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, con **la posibilidad real de financiar una pensión de vejez o, en su defecto, de acceder a una indemnización sustitutiva o devolución de saldos, con independencia de la pensión de jubilación de que disfruta en el sector público como docente***” (Resalta la Sala).

De otro lado, en sentencia SL 1127 del 9 de marzo de 2022, se hizo referencia a la compatibilidad de las prestaciones que reconoce el Sistema General de Pensiones, con la denominada pensión gracia, que en este caso fue concedida por el DEPARTAMENTO DEL HUILA. Se dijo en aquella providencia que

“... a pesar que no se discute en casación importa destacar que mediante Resolución n.º 16665 de 2002 la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal le reconoció al actor una pensión de jubilación, prestación que si bien es de origen legal, lo cierto es que es compatible con las cotizaciones que se pretenden compensar y la pensión de jubilación oficial conforme el artículo 3.º de la Ley 114 de 1913, en concordancia con el artículo 19 literal g) de la Ley 4 de 1992, dado que corresponde a la «pensión gracia» que le fue concedida al actor por el tiempo que laboró como docente del Departamento de Antioquia -25 de abril de 1980 hasta 30 de septiembre de 2002-.”

En esa línea, es criterio también de esta Sala que la pensión del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO e incluso la pensión gracia que paga CAJANAL, constituyen una prestación que se genera en virtud del tiempo de servicio prestado en el sector público, por lo tanto difiere de las prestaciones que puedan ser reconocidas en relación con las cotizaciones aportadas al ISS o a las AFP del RAIS, las cuales tienen la finalidad de generar a favor del afiliado las prestaciones del Sistema General de Pensiones, ya sea la

pensión de vejez si se cumplen los requisitos, o bien la devolución de saldos si no alcanza a acumular el capital suficiente, lo que significa que el financiamiento de las dos prestaciones resulta ser diferente.

Obsérvese cómo la pensión de jubilación reconocida al señor CUELLAR ARTUNDUAGA mediante Resolución 2901 del 26 de febrero de 2008, se hizo como docente de *“vinculación nacionalizado”*, además de que para ese entonces laborando como docente de la Institución Educativa COLEGIO FELIX HENAO BOTERO del Municipio de Medellín, mientras que la pensión reconocida por CAJANAL tuvo como fundamento los servicios prestados al DEPARTAMENTO DEL HUILA, es decir, en ningún caso se tuvo en cuenta que había realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones, tanto al ISS, como a PROTECCIÓN S.A., cuyos aportes incluso ya fueron devueltos.

Por lo tanto, a juicio de la Sala, el Sr. JOSÉ ENRIQUE CUELLAR ARTUNDUAGA tiene derecho a la devolución de saldos por las cotizaciones que durante toda su vida laboral alcanzó a efectuar tanto a la AFP PROTECCIÓN S.A. como ya se hizo, como al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a través del respectivo bono pensional, el cual deberá ser expedido y pagado por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO conforme se ordenó en la sentencia de primera instancia, esto es, conforme al trámite legal correspondiente y dentro de los plazos fijados por la ley, siendo obligación de PROTECCIÓN S.A. estar presta a adelantar todas las gestiones que la ley le impone.

Costas procesales.

Sobre lo manifestado por el MINISTERIO DE HACIENDA relacionado con la imposición de condena en costas a su cargo, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva

desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Como dicha entidad resultó vencida en juicio debe asumir esa obligación de manera que la sentencia también se confirmará en ese puntual aspecto.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el 17 de noviembre de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e0597f9ad1dca644e6fa7b1bc10eece0a8453a241ab3d7b6529af6cff2cb1467**

Documento generado en 02/03/2023 03:10:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>